



Argentina

COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER **52^a sesión**

Tema 3: "Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y de la 23^a Sesión Especial de la Asamblea General titulada "Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo veintiuno"

Intervención de la Embajadora Magdalena Faillace
Representante Especial para temas de la Mujer en el Ámbito Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina

Nueva York, 27 de febrero de 2008
Sírvase verificar contra lectura

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN **52th session**

Item 3: "Follow-up to the Fourth World Conference on Women and to the twenty-third special session of the General Assembly entitled "Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century"

Statement by Ambassador Magdalena Faillace
International Special Representative on Women issues of the
Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship
of the Argentine Republic

New York, February 27 2008
Check against delivery

Permanent Mission of the Argentine Republic to the United Nations
One United Nations Plaza 25th Floor
New York, NY 10017

Sr. Presidente,

Permitame extenderle la felicitación de mi delegación por su elección como Presidente de esta importante Comisión. Deseo que estos sentimientos se hagan extensivos a los Sres. y Sras. Vicepresidentes.

Aprovecho la ocasión para transmitirle respetuosamente al Secretario General Ban Ki Moon, la manifestación de apoyo y solidaridad de la Argentina en su campaña de lucha contra la violencia contra la mujer, que tan elocuentemente nos presentara el día lunes. Asimismo, compartimos las preocupaciones expresadas por la Subsecretaria General Asha Rose Migiro en su llamamiento a la acción para detener la práctica de la Mutilación Genital Femenina.

Asimismo, quisiera expresar mi reconocimiento a la Secretaría cuya invaluable ayuda ha permitido en buena medida el éxito y prestigio de nuestra Comisión.

La Argentina desea alinearse con las intervenciones realizadas en nombre del Grupo de los 77 y China, del Grupo de Río y de los Estados miembros y asociados del MERCOSUR.

Sr. Presidente,

La brecha entre la igualdad jurídica y la desigualdad social entre mujeres y varones afecta la trama social y relativiza la ciudadanía real de las mujeres.

Ante esta situación, el gobierno argentino se ha propuesto profundizar el proceso de inclusión social iniciado en 2003 como objetivo de las políticas públicas, que ha **permitido incorporar la perspectiva de género en cuestiones transversalizando la misma en programas dentro de la estructura del Estado**.

Hace más de 15 años la República Argentina decidió institucionalizar la perspectiva de género en sus políticas públicas a través de la creación en 1992 del Consejo Nacional de la Mujer como organismo responsable del cumplimiento y seguimiento de la CEDAW y este proceso se ha visto fortalecido desde entonces con la creación de nuevos organismos, como la Comisión Ad-hoc para el Seguimiento de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en el ámbito de la Cancillería en 1995 o el Programa "Juana Azurduy" de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres dentro del Ministerio de Desarrollo Social en 2006.

En 2007, queremos subrayar la creación del Observatorio sobre Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, conducido por una mujer, como mecanismo de recopilación, análisis y diagnóstico sobre la situación de las mujeres y su inserción en el ámbito militar, desde donde se han impulsado diversas reformas normativas tendientes a erradicar en ese ámbito patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres.

Paralelamente, la República Argentina ha impulsado medidas de acción positiva que han complementado el proceso de visibilización de las mujeres en el espacio público y su acceso a espacios poder. Es importante que las mujeres estén representadas en todos los niveles del espectro político y en la toma de decisiones porque, una democracia sin igualdad en derechos para las mujeres no es democracia, y porque la experiencia muestra que las mujeres en lugares decisarios de poder tienen muchas más posibilidades de producir cambios y políticas que mejoren la situación de otras mujeres.

Con este espíritu nuestro país aprobó en 1991 la Ley 24.012 o Ley de Cupo, que estableció que en todo cargo electivo se deberá contar con un porcentaje mínimo del 30% de mujeres en la lista de candidatos y en lugares expectables, es decir, con posibilidades reales de ser electas, cuya consecuencia hoy es que la representación de las mujeres en el Poder Legislativo Nacional ha alcanzado un 38,89% en la Cámara de Senadores y 39,61% en Diputados.

Respecto de la presencia femenina en el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de las elecciones nacionales de 2007, por primera vez en la historia del país, tenemos una mujer Presidenta de la República, elegida por el voto popular, cinco mujeres Vice-gobernadoras -en las provincias de Misiones, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Neuquén- y una Vice-jefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También por primera vez, una mujer fue elegida Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego.

En este punto, resulta necesario subrayar también la sanción en el año 2002 de la Ley 25.674 de Cupo Sindical Femenino. Esta medida implica no sólo el fortalecimiento de la participación de la mujer en el mundo laboral sino también su inserción en el ámbito del poder gremial. Gracias a esta ley, cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad. A partir de este nuevo marco jurídico se observa que, del total de entidades profesionales y sindicales registradas en el año 2006, el 72% han incorporado el cupo femenino en sus estatutos.

En cuanto a la participación de las mujeres en el recientemente creado Parlamento del MERCOSUR, la República Argentina demostró su compromiso designando seis mujeres representantes, que constituyen el 30% de las bancas en ese foro unicameral.

En este escenario de alto nivel de participación política de las mujeres argentinas, la preocupación por la **participación de la mujer en la economía** y su incorporación al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los varones resulta una prioridad para nuestro gobierno.

Somos conscientes de que aún subsiste una división sexual del trabajo que se evidencia en la concentración de mujeres en algunas actividades como el servicio doméstico (97,6 %), la educación (76,6 %), los servicios sociales y de salud (72,7%), en parte por la restricción que el trabajo no remunerado impone a las mujeres a la hora de conciliar las tareas del ámbito público con las exigencias de su ámbito doméstico.

El Estado argentino adhiere el criterio auspiciado por Naciones Unidas del reparto **equitativo de tareas y responsabilidades entre mujeres y hombres respecto del hogar y la familia**. Es por ello que ha promovido la realización de una investigación o prueba piloto, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y replicada recientemente por el Consejo Nacional de la Mujer a través de su página de Internet, que concluyó que el 90% de las mujeres se ocupan de las tareas domésticas y esto implica para aquellas que no trabajan fuera del hogar una dedicación que alcanza 7 horas y 20 minutos diarios, mientras que para las mujeres ocupadas su jornada de trabajo se distribuye en 7 horas 16 minutos en su empleo remunerado y 4 horas 17 minutos en el trabajo doméstico, lo cual eleva su jornada de trabajo a 11 horas y 33 minutos diarios. Esta investigación concluyó, además, que la participación masculina en el trabajo doméstico no es equitativa.

De este modo, teniendo en cuenta la ausencia de reconocimiento económico al trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres –única actividad que no tiene retiro-, la aprobación del Programa Seguro de Capacitación y Empleo para el Servicio Doméstico del Ministerio de Trabajo, el cual busca fortalecer las capacidades de los trabajadores y trabajadoras de esta actividad promoviendo su especialización o profesionalización, y la implementación de la Campaña "El Trabajo en Blanco", que contribuye a contrarrestar el alto nivel de informalidad del empleo doméstico, son ejemplos de la estrategia nacional de empoderamiento de las mujeres argentinas.

Al respecto, subrayamos que al comenzar esta Campaña o "Plan de Inclusión Social" en enero de 2005, sólo había 58.000 empleadas domésticas registradas. Desde entonces y hasta julio de 2007, el total de inscriptas ya había alcanzado a 214.000 mujeres, que gozan de todos los beneficios de la seguridad social.

Del mismo modo, la modificación del sistema de jubilaciones y pensiones argentino llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación ha producido un verdadero avance cualitativo a favor de las mujeres.

Esta reforma, conocida como "jubilación del ama de casa", ha permitido que las personas que no cuenten con los 30 años de aportes o que no hayan llegado a la edad mínima para jubilarse, obtengan la jubilación básica, el derecho al cobro de asignaciones familiares y la cobertura de una obra social. Cabe subrayar que, hasta agosto de 2007, la cifra total de beneficiarios de esta reforma previsional fue de 1.419.001, siendo el 88% mujeres, lo cual ratifica el reconocimiento concreto por parte del Estado argentino del aporte real que realizan las mujeres a la economía del país.

Es importante señalar aquí también que los principales cambios de la estructura socio-ocupacional, caracterizada por la creciente participación e ingreso de las mujeres al mercado de trabajo para compensar la pérdida de ingresos de sus hogares, durante las décadas del '80 y '90, han contribuido con la consolidación de un enfoque de género en el desarrollo basado en la necesidad de considerar y modificar las relaciones existentes entre varones y mujeres para el logro de un desarrollo equitativo y sustentable, que permita la igualdad de oportunidades para ambos.

Revertir las relaciones de subordinación, que se evidencian en la división sexual del trabajo, implica también ampliar las posibilidades de acceso y control sobre recursos naturales y los beneficios que generen en el marco de un desarrollo sustentable.

Es por ello que el tema **género y medio ambiente** ha sido incluido en la agenda pública para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus dinámicas productivas en sus geografías específicas. La reciente creación del Programa Ambiente, Género y Desarrollo dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es un sólido ejemplo de este compromiso.

En este contexto, una de las principales preocupaciones del Programa ha sido impulsar estrategias para incorporar transversalmente la perspectiva de género en las políticas públicas de gestión ambiental, con especial énfasis en la contaminación y el acceso al agua potable. Frente a esta situación, el Estado Argentino viene trabajando en un plan de saneamiento ambiental y en el tratamiento de las consecuencias de la contaminación impulsando acciones preventivas y de asistencia. Dicho trabajo se realiza en articulación con las organizaciones no gubernamentales conformadas mayoritariamente por mujeres, las asociaciones de medio ambiente y grupos vecinales.

Pero sabemos que la **violencia**, un flagelo que tiene a las mujeres como sus principales víctimas pero que impacta directamente sobre la familia y la sociedad en general, contrarrestar la eficacia de las políticas enunciadas.

Para ratificar la prioridad de la lucha contra la violencia, se está poniendo en marcha un Plan Nacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres desde el Consejo Nacional de la Mujer, y se han creado agencias y programas en diferentes Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional con el propósito de transversalizar esta política.

Para citar sólo dos ejemplos: el Ministerio del Interior de la Nación creó en 2006 el Programa "Las víctimas contra las violencias", con el objetivo de responder a situaciones de emergencia así como brindar asesoramiento a través de una línea de tres dígitos sobre el abuso y/o violación sexual, tanto en niños como en adolescentes y adultos, de ambos sexos; y desde la Cancillería se ha impulsado el lanzamiento de una Campaña Nacional de Sensibilización y Concientización sobre la Violencia contra la Mujer así como un Concurso de Afiches organizado por la Reunión

Especializada de la Mujer del MERCOSUR que ha permitido avanzar en la difusión simultánea de un mensaje unificado para enfrentar esta problemática.

La violencia laboral es uno de los ejes principales de la lucha contra la violencia hacia la mujer por parte del Estado nacional, que ha creado una Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral en el ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y recientemente la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Subsecretaría de la Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Del mismo modo, se ha acompañado el trabajo de la Oficina de Denuncias de Violencia Laboral en el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que funciona en el ámbito del Poder Judicial.

Somos conscientes que aún falta mucho por resolver y por eso consideramos importante la preocupación de las Naciones Unidas por la producción de **indicadores y estadísticas sobre violencia de género** que permitan dar cuenta y comparar la realidad de cada uno de nuestros países de manera unificada.

Queremos destacar, en este sentido, el trabajo que se ha venido desarrollando durante estos últimos años en relación con la problemática a través de la Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR, que ha creado una Comisión Técnica, integrada por funcionarias y/o expertas, con el propósito de impulsar un Registro Único de Casos de manera de facilitar la comparación de datos estadísticos.

Finalmente, la República Argentina valora el esfuerzo de esta Organización que ha impulsado a partir de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la **participación de la mujer en pie de igualdad en la prevención, gestión y solución de los conflictos y consolidación de la paz**.

Por lo tanto, nuestro país aceptó ser sede de un Programa Piloto que permitirá documentar y compartir sistemáticamente buenas prácticas y conocimientos adquiridos sobre el enfoque de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, según lo acordado en Pretoria, Sudáfrica, en febrero de 2007.

En este marco, la Cancillería argentina convocó la conformación de un Grupo de Trabajo Interministerial que organizará entre el 13 y el 15 de mayo próximo un Taller Regional sobre la implementación de la Resolución 1325 a fin de permitir elaborar estrategias comunes en las cuatro áreas principales de las recomendaciones y el Plan de Acción acordados en Pretoria que, mediante la incorporación cualitativa y cuantitativa de mujeres, garantice la perspectiva de género en la planificación y concreción de las operaciones de mantenimiento de la paz.

Por otra parte, diferentes resoluciones han coadyuvado a la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de las Fuerzas Armadas como por ejemplo, exceptuar a las mujeres lactantes y embarazadas de la tarea de cumplir guardias; derogar la reglamentación vigente en el ámbito de la Armada que permitía considerar disciplinariamente aspectos de la vida privada de las personas tales como los casos de embarazo siendo soltera; y derogar las directivas que discriminaban "situaciones regulares e irregulares de familia" limitando el progreso profesional. Tales situaciones "especiales" incluían numerosos estereotipos discriminatorios en razón del género.

Con respecto a las cifras, hasta enero de 2008, nuestro país cuenta con 26 mujeres que se encuentran prestando servicios en misiones de paz: 21 mujeres prestando servicios en Haití (MINUSTAH) y 5 en Chipre (UNFICYP).

Subrayamos que existe un componente femenino creciente en diferentes organismos encargados y relacionados con las operaciones de mantenimiento de la paz:

- Dentro del Ministerio de Defensa, fue creada la Dirección General de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, en la cual el 83% de sus miembros son mujeres.
- En el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) se desempeñan 18 mujeres, 8 militares y 10 civiles.
- El Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz perteneciente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta con 11 mujeres como parte de su personal.

En relación con las misiones de ayuda humanitaria llevadas a cabo por la Comisión Cascos Blancos, durante el año 2007 participaron un 36% de mujeres.

Todas estas políticas, partiendo del concepto de Hanna Arendt del "derecho a tener derechos" aplicado a las mujeres, se enmarcan en la firme política de derechos humanos sostenida por la Argentina, en la que las mujeres han sido protagonistas en la lucha por la recuperación de la memoria, con paz y justicia.

Mr. Chairman,

I would like to congratulate you on behalf of my Delegation on your election to lead this important Commission. Please make this sentiment extensive to the elected Vice Chairs.

I would also like to use this opportunity to respectfully extend to Secretary General Ban Ki Moon the assurances of the support and solidarity of Argentina in the campaign for the fight against violence against women, that he eloquently launched here this past Monday. Also, we would like to share the concerns expressed by the Deputy Secretary-General Asha Rose Migiro in her appeal concerning Female Genital Mutilation.

I would further like to express our appreciation to the Secretariat, which invaluable support has been no small part to the success of this Commission.

Argentina would like to align itself with the statements made on behalf of the Group of 77 and China, of the Rio Group and of the Member and Associated States of MERCOSUR.

Mr. Chairman,

The gap between legal equality and social inequality between women and men affects the social fabric and makes the real participation of women becomes relative.

In facing this situation, the Argentine Government is determined to strengthen the social inclusion process that started in 2003 as an objective of public policies that have allowed the incorporation of the gender perspective in programs within the whole of the structure of the State.

Argentina decided more than 15 years ago on the institutionalization of the gender perspective in its public policies through the creation, in 1992, of the National Council on Women as an organization that is responsible for the fulfillment and follow-up of CEDAW. This process has strengthened since then with the creation of new institutions, such as the Ad-hoc Commission for the Follow-up of the Beijing Platform of Action in the Ministry of Foreign Affairs, in 1995, or the Program "Juana Azurduy" for the Strengthening of the Rights and Participation of Women, within the Ministry of Social Development, in 2006.

We must underline the creation, in 2007, of the Observatory on the Integration of Women in the Armed Forces within the Ministry of Defense -lead by a woman- as a mechanism for data gathering, analysis and diagnosis of the situation of women and their insertion in the military world, from where diverse normative reforms have been prompted towards the eradication of discrimination patterns against women.

At the same time, Argentina has fostered measures for positive action that have complemented the process for enhanced visibility of women in public spaces and their access to power. It is important that women be represented in all levels of the political spectrum and decision making, since a democracy without equal rights for women is no democracy. And because experience shows that, when there are women in decision making places, they have better chances to produce change that improves the situation of fellow women.

In this spirit, our country adopted in 1991 Law 24.012, or the Quota Act, which established that in all elective positions in Parliament a minimum of 30% of the candidates must be women. The consequence today is that the representation of women in the National Legislation has reached 38.89% among the Senators and 39.61% among the Representatives.

Regarding female presence in the Executive Branch, since national elections took place in 2007, for the first time in the history of our country we have a female President elected by popular vote. We have five women as Deputy Governors in the provinces of Misiones, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Neuquen - and a Vice Chief of Government in the Capital City, Buenos Aires. Also, for the first time a women was elected to become Governor of the Province of Tierra del Fuego.

At this point, it is necessary to underline also the sanctioning of Law 25.674 in 2002 on the Female Unions Quota. This action implies, not only the strengthening of the participation of women in the labour market, but also her insertion in the sphere of trade unions. Thanks to this law, each collective bargaining unit on labour conditions must include a certain percentage of women delegates, in proportion with the number of female workers within that type of work or activity. Since this new legal framework was adopted, we observe that of the total of registered professional and union entities for 2006, 72% have incorporated the female quota in their Rules and Regulations.

Concerning the participation of women in the recently-created MERCOSUR Parliament, Argentina demonstrated its commitment by appointing 6 female representatives, 30% of its seats in this forum.

In this scenario of high level political participation of Argentine women, the concern for women participation in the economy and their incorporation in the labour market under equal conditions with men is a priority for our government.

We are aware that there is still a sexual division of labour that is evidenced by women being concentrated in some activities, such as domestic work (97.6%), education (76.6%) and social services and health (72.7%). This is partly because of the restriction that unpaid work imposes on women when they have to combine their duties in the public sphere with domestic requirements.

The Argentinean State adheres to the United Nations criterion to equally distribute tasks and responsibilities among men and women at home and in the family. Thus, it has promoted an investigation, or pilot plan, which took place in Buenos Aires and was recently published by the National Council on Women on their web-site. The study concluded that 90% of women who take care of their household chores and do not work outside their homes, spend 7 hours and 20 minutes daily on this task. Those who work outside their homes, spend 7 hours and 16 minutes at their paid work plus 4 hours and 17 minutes on their domestic chores, which elevates their daily working day to 11 hours and 33 minutes. This investigation concluded, moreover, that male participation in household chores is not equivalent to those of women.

Taking into consideration the lack of economic recognition of domestic and care work by women -which is the only activity from which there is no retirement- the Employment and Training Insurance Program for Domestic Service of the Ministry of Labour was created, which aims at strengthening the qualification of workers, promoting their specialization or professionalization. This, and the implementation of the Campaign "Work in the Books", that contributes towards the elimination of the high level of informality in the domestic work sphere, are examples of the national strategy for the empowerment of Argentine women.

In this respect we would like to stress that, at the beginning of this campaign or "Plan of Social Inclusion" in January, 2005, there were only 58.000 registered domestic employees. Since then, by July 2007 the total has reached 214.000 women, all of whom have social security benefits.

The same way, the modification of the Argentine pension system by the Ministry of Labour and Social Security has resulted in a true qualitative advance in favor of women.

This reform, known as "pension for the homemaker" has allowed those who have not reached 30 years of contributions or who have not reached the minimum age for retirement, to obtain a basic pension, the right to receive family aid and coverage for health care. It is important to mention that until August 2007, the number of beneficiaries of this reform reached 1,419.001, of which 88% are women. This confirms the concrete recognition on behalf of the Argentine State of the real contribution that women add to the economy of the country.

It is also important to point out here that the main changes in the social-occupational structure, characterized by the increasing participation of women in the labour market to compensate for the loss of income in their households during the 80's and 90's, have contributed to the consolidation of a gender focus based on the necessity to consider and modify the existing relationship between men and women, in order to reach an equitable and sustainable development that will allow equal opportunities for both.

Reverting relations of subordination that are evidenced in the sexual division of work also implies the possibility of access to and control of natural resources and benefits that are generated in the framework of a sustainable development.

This is why the issue of gender and environment has been included in the public agenda, to improve the quality of life of our citizens, taking into consideration their productive dynamics in their specific geographical areas. The recent creation of the Environment, Gender and Development Program under the Ministry of Environment and Sustainable Development is a clear example of this commitment.

In this context, one of the main concerns of the Program has been to promote strategies that incorporate the gender perspective in an over-arching way in public policies and environment management, with special emphasis on contamination and access to drinkable water. Under such circumstances our State has been working on a plan for environment cleaning and the treatment of the consequences of contamination, promoting preventive actions and assistance. This work is being done together with non-government organizations whose members are mainly women, environmental associations and neighborhood groups.

However, we know that violence, a scourge that has women as its main victims but has a direct impact on families and on society in general, hinders the efficiency of the above mentioned policies.

Confirming that fight against violence is a priority, a National Plan to Eradicate Violence against Women is being set in motion from the National Council on Women. Agencies and programs have been created in the different Ministries of the Executive Branch with the goal of making this an over-arching policy in all spheres.

To mention only two examples: The Ministry of Interior created in 2006 a program called "Victims against Violence" with the objective of responding to emergency situations as well as of giving support through a three-digit phone number for claims of sexual abuse and/or violence against children, adolescents and adults of both sexes; also, the Ministry of Foreign Affairs has launched a National Campaign on Sensibility and Awareness for Violence against Women as well as a contest for Poster design, organized by the Special Meeting on Women of MERCOSUR, that has allowed the simultaneous dissemination of an unified message to face this problem.

Fight against violence in the workplace is one of the principal axes of the fight on violence against women carried out by the State. A Support Office on Violence in the Workplace was created within the framework of the "Tripartite Commission on Equal Treatment and Opportunity among Women and Men in the World of Labour" of the Ministry of Labour, Employment and Social Security. Recently, the Commission on Equal Opportunities was created in the Under Secretariat of Public Office, which answers to the Office of the National Minister Chief of Cabinet. Also, we have been working with the Labour Violence Claims Office within the National Prosecutor for Administrative Investigations' office, in the Judicial Branch.

We are aware of the fact that there is much to be done. Therefore the importance of the concern of the United Nations in producing indicators and statistics on gender violence that allow for taking stock and compare the realities in all of our countries, in an unified manner.

In this line, we would like to underline the work of these past years regarding this issue through the Special Meeting on Women of MERCOSUR, which has created a Technical Commission whose members are officers and experts. Its goal is urging for a Unique Register of Cases so that the comparison of statistical data may be possible.

Finally, Argentina appreciates the efforts that this Organization has lead since the adoption of Security Council Resolution 1325, to strengthen the participation of women in the prevention, management and conflict solution and peacebuilding, on an equal basis.

Therefore, our country has accepted to host a Pilot Program that will allow the documentation and systematic sharing of good practices and acquired knowledge on the gender focus in peacekeeping operations, as agreed in Pretoria, South Africa in February, 2007.

In this framework, the Argentine Ministry of Foreign Affairs established an Inter Ministerial Working Group that is tasked with organizing a Regional Workshop on the implementation of Resolution 1325 between May 13 and 15, in order to elaborate common strategies in the four main areas of the recommendations and the Action Plan that was agreed upon in Pretoria which, through qualitative and quantitative incorporation of women, may guarantee a gender perspective in the planning and realization of peacekeeping operations.

On the other hand, different resolutions have contributed to the incorporation of the gender perspective in the Armed Forces, such as for example, the exception for breast-feeding and for pregnant women from the task of on-call duties, elimination from the current Army regulations any rules that discriminate against pregnant women who are not married or between "regular or irregular situations of family" that limit professional progress. Such "special" situations used to include several discriminatory stereotypes based on gender.

Regarding some figures, up to January, 2008 our country has 26 women who participate in peacekeeping missions: 21 in Haiti (MINUSTAH) and 5 in Cyprus (UNFICYP).

We underline that there is an increasing female component in the different organizations relating to peacekeeping:

- In the Ministry of Defense, the Department of Cooperation for Peacekeeping was created, 83% of whose members are women
- The Argentine Center for Joint Training for Peacekeeping (CAECOPAZ) includes 18 women in its staff, 8 military and 10 civilians.
- The staff of the Peacekeeping Operations Department under the Joint Chiefs of Staff for the Armed Forces includes 11 women

Regarding humanitarian missions that take place under the White Helmets Commission, during 2007, 36% of the participants were women.

All these policies, based on the concept by Hanna Arendt of "the right to have rights" applied to women and are within the firm human rights policy undertaken by Argentina, where women have been protagonists in the fight to recover our memory, with peace and justice.